

1.2

1. ANTECEDENTES

¿Qué reveló el golpe?

Luis Pedro España N.

Antes del 4 de Febrero pasado muchos de los análisis sobre la viabilidad futura de la democracia coincidían en que el sistema político venezolano estaba transitando por un período de ajuste. Dicho ajuste consistía en acoplar las formas institucionales de resolución de las diferencias y los conflictos sociales, a la nueva magnitud y contenido de las tensiones provenientes de la esfera económica y social.

Lógicamente, no todos los análisis suponían una transición de igual signo. Mientras que para unos la modernización del sistema político suponía el avance progresivo de las relaciones políticas hacia la apertura y la profundización de la democracia, para otros, la transición pasaba por el endurecimiento del sistema. En otras palabras, el ajuste del sistema democrático podía conducirse en dirección a acelerar la democratización a través de reformas institucionales y el incremento de la participación ciudadana; o por el contrario, el cambio de sentido de las relaciones políticas del país llevarían al bloqueo de la participación, la represión a la inconformidad y la insuficiencia de los cambios institucionales.

El contraste entre las dos vías sugeridas por estos análisis que se preguntaban por el futuro de la democracia, con el fin de verificar cuál era la que fácticamente se estaba presentando como tendencia del sistema político, nunca aclaró la duda. Bien por las dificultades mismas que implica medir el grado de democratización (variable que en algunos aspectos resulta claramente intangible), o bien porque frente a un "hecho de apertura del sistema", como la elección directa de gobernadores y alcaldes o la participación de organismos no gubernamentales en la gestión estatal, se antepone otros "hechos de cierre del sistema" como la absurda represión de las protestas, la involución de los partidos políticos y sus estructuras; lo cierto fue que la transición del sistema político seguía bajo el signo de la duda, y ahora, tras el intento de golpe, mucho más.

No obstante, frente al desacuerdo de

estos análisis sobre la forma cómo se daría, o se estaba dando la transición política en el país, parecía haber un consenso sobre la imposibilidad inmediata de que los desajustes producidos por la llamada "crisis económica" y la "crisis social" (ésta última agudizada con el "programa de ajuste económico" en el trienio 1989-1991) condujeran a una salida de fuerza. Tal certeza podía sustentarse en una hipótesis lógica según la cual las democracias no caen por la aparición de problemas o crisis que se creen (o son en realidad) insolubles, sino hasta tanto aparezcan opositores desleales que se presenten como portadores de "la solución" y hagan creer que el origen del problema o de la crisis está en las reglas del sistema político.

Toda democracia, incluida la venezolana, dispone de su cuota de opositores desleales. Entendiendo que estos son sujetos políticos cuya participación en el sistema político tiene por objeto cambiar el orden Constitucional, tales actores no representan un problema para la estabilidad y viabilidad del sistema democrático, en la medida que su poder político sea lo suficientemente bajo como para no representar una opción de éxito dentro de alguna vía de acceso al poder, sea ella electoral, armada o conspirativa.

Menos aún un opositor desleal representa un peligro serio para la democracia si éste no cuenta con algún grado de credibilidad en grupos o actores "semi-leales" o "apáticos", que son los que en definitiva constituyen la mayoría.

En la Venezuela anterior al 4 de febrero de 1992, no parecía existir opositores con las características sugeridas por la hipótesis, a lo más, sólo "candidatos a dicho puesto" podían identificarse. Por un lado, minúsculos grupos progresistas, sin ningún tipo de arraigo a nivel político, perseguían objetivos próximos a una Revuelta Popular. Del otro lado del spectrum, grupos conservadores pertenecientes a las élites, alarmados con la situación de tensión social (tipo movilizaciones 27 de Febrero de 1989), podían verse tentados a promover acciones políticas desleales a través de las Fuerzas Armadas.

En este marco de análisis ciertamente era improbable la aparición de un "Golpe" como respuesta política a la crisis. Siempre y cuando, la totalidad de las FF.AA. permanecieran en su papel de "Institución del Estado" y no pretendiera ser, como alguna vez lo fue en el pasado, un "Sujeto Político" que compitiera por la ocupación del Estado.

Esta última condición fue la que no se cumplió, mostrándose de este modo una realidad que no fue evidente sino hasta la madrugada del 4 de febrero, por más sospechas que se tuviesen. A lo interno de las FF.AA. se reveló una fractura de dimensiones suficientes como para llevar a movilizar un intento de derrocamiento al Presidente Pérez.

Tratar de precisar la magnitud de la fractura que ha aparecido a la "luz pública" en las FF.AA., como consecuencia del propio intento de golpe, forma parte del campo de la especulación. Pero ella es tan real como la fractura que existe a nivel de la legitimidad con que cuenta el propio sistema político.

Del mismo modo como el simple hecho de que haya ocurrido una movilización militar (que llegó a comprometer el control sobre las cuatro principales ciudades del país) evidencia la posibilidad de que una parte de las FF.AA. dejaron de ser "institución" para ser "sujeto político"; la situación de expectación en que se mantuvo la población a lo largo de las horas que duró el intento de golpe, también revela o constituye, aunque indirectamente, una prueba más del deterioro de la legitimidad por parte del sistema. Tal prueba es similar a la evidente pérdida de credibilidad de las instituciones y la dirigencia política, el ausentismo electoral mostrado en los últimos comicios, la ineficiencia política de los actores del sistema para enfrentar y solucionar problemas, etc.

El golpe y las reacciones inmediatas por parte del mundo civil pueden conducir a dos constataciones, sobre las cuales no teníamos evidencias concluyentes. Primero, la existencia de una fractura en las FF.AA. cuya magnitud aún debe ser precisada y, segundo, una nueva reafirmación de la presencia de un quiebre en la esfera política expresada en la pérdida creciente de legitimidad a nivel (al menos) de las instituciones y la dirigencia política del país.